

Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos

De como los paramilitares ganaron varias guerras, cambiaron el mapa político del país y entraron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe



EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

LEÓN VALENCIA

DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS

MAURICIO ROMERO

INVESTIGADOR ASOCIADO

LAURA BONILLA

ANGÉLICA MARÍA ÁRIAS ORTIZ

OSCAR FERNANDO SEVILLANO

SEBASTIÁN DÍAZ -CARTOGRAFÍA-

BOGOTÁ., D.C

FEBRERO DE 2007

Apoya



Asdi

AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO



**CORPORACIÓN
NUEVO ARCO IRIS**

A lo largo del año 2006 se presentaron varios debates públicos donde salió a relucir la vinculación de algún parlamentario o dirigente político con los paramilitares. La respuesta inmediata del aludido era reclamar pruebas de alcance judicial: un documento, o la grabación de una reunión, o la declaración de un testigo que pudiera decir que los paramilitares habían amenazado con las armas a una población para obligarla a votar por un candidato. Muchos de ellos personas prestantes de reconocidas familias acudían a sus abuelos como argumento para contrarrestar cualquier nexo con las fuerzas ilegales. Los dirigentes políticos apelaban a este recurso para protegerse de la vinculación a procesos judiciales, pero también para eludir responsabilidades políticas.

El recurso era sin duda válido en el caso de las investigaciones judiciales, pero no lo era tanto en el caso de investigaciones de carácter social y político en las cuales se podían derivar responsabilidades acudiendo a otras formas de comprobación de la existencia de alianzas y compromisos. Por ejemplo, utilizar variables como las rutas que siguió la expansión paramilitar y las transformaciones que sufrió la competencia política electoral.

En la investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris nos planteamos al principio –mediados de 2004- el dilema sobre el tipo de indagación que haríamos. Con alcances judiciales o simplemente con alcances políticos. Escogimos el segundo camino. Partimos de dos premisas. Una, los paramilitares en su proceso de expansión han ganado varias guerras regionales y han establecido un férreo control militar del territorio; tienen además la necesidad de intervenir en las campañas electorales y la clara intención de hacerlo. Buscan una influencia decisiva en la política regional y nacional para entrar con mayor seguridad hacia unas negociaciones de paz. Dos, las elites políticas regionales en su afán de resistir a los cambios democráticos en el nivel nacional y a los

intentos de negociación con las guerrillas, también tienen necesidad de apoyarse en el actor armado ilegal, muestran la clara intención de buscar ese respaldo y están dispuestas a responder a algunas exigencias de los paramilitares.

La investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris llegó a la siguiente conclusión: En una gran ola de expansión los paramilitares ganaron varias guerras y en ese proceso lograron modificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos (Ver Anexos Tablas 1,2, 3, 4 y 5), transformar parcialmente el de otros, establecer una gran bancada parlamentaria, influir en las elecciones presidenciales, capturar el poder local en diversas regiones del país y entrar en un proceso de negociación con el estado. Una de las consecuencias históricas más notables de este proceso fue el desmembramiento de los Partidos Liberal y Conservador y el surgimiento de nuevos grupos que tendrían un gran impacto en el régimen político.

Para los analistas del acontecer político nacional ha pasado inadvertido el hecho de que dos de los partidos más antiguos del mundo y sin duda los más viejos de América Latina hayan perdido las mayorías electorales en el Congreso de la República en unos pocos años. También que los grupos políticos que les arrebataron esas mayorías tengan presencia especialmente en las zonas donde un actor armado ilegal impuso sus dominios.

En la indagación se trabajó con investigadores en ocho regiones del país dirigidos por Mauricio Romero y León Valencia para elaborar monografías sobre el fenómeno del paramilitarismo. La investigación –patrocinada por el gobierno de Suecia y en la que colaboraron centros de estudios de varias universidades- abarcaba más temas que la alianza entre paramilitares y políticos, pero se detuvo muy especialmente en este aspecto. Se hizo un seguimiento riguroso a

las informaciones de prensa, se habló con múltiples personas en las regiones, se escudriñaron los registros electorales del 2002, del 2003 y del 2006. Se confrontaron los datos y apreciaciones recogidas con otras investigaciones.

Primero se averiguó como había sido la última ola de expansión de los paramilitares a lo largo y ancho del país ocurrida entre el año 1999 y el 2003. Luego se indagó por los grupos políticos que habían surgido o se habían fortalecido de manera especial en ese tiempo en las regiones de la expansión paramilitar y por alteraciones relevantes de la competencia política en esos lugares.

El foco de atención lo colocamos en el limitado lapso de tiempo entre 1999 y el 2003 porque es allí donde se palpa de manera clara un interés político y electoral manifiesto. Queríamos entender a profundidad este periodo. Aunque, claro esta, miramos un poco hacia atrás y también hacia delante. Estudiamos lo ocurrido en 1997 y 1998 para saber que había pasado en el proceso de unidad de los grupos paramilitares dispersos y luego miramos lo acontecido entre el 2003 y el 2006 para comprender los resultados últimos del plan trazado por los estrategas paramilitares o sus beneficiarios políticos.

Entre 1997 y 1998 se produce la unidad de los grupos paramilitares que ya existían y las cooperativas Convivir aportan su gran torrente a este proceso. A una primera reunión en abril de 1997 las fuerzas de Córdoba y Urabá consolidadas en las ACCU, lideran la confederación de los diferentes grupos, federación que se fortalece en una segunda reunión en mayo de 1998.¹

¹ Castaño, Carlos. *Las Autodefensas y la Paz. Compilación oficiales de las autodefensas y de artículos sobre las autodefensas. Editorial Colombia Libre. 2000.*

Para 1999 esas fuerzas se configuran como un verdadero ejército irregular, con un carácter particularmente ofensivo, controlan territorios nuevos o afianzan su dominio en los lugares en donde ya se encontraban. La guerra adquiere un nuevo rostro: ocupación del territorio a sangre y fuego, vinculación masiva de los narcotraficantes en la empresa paramilitar y una estrategia de captura del poder local e influencia en el poder nacional.

Ya Carlos Castaño había reconocido que el setenta por ciento de las finanzas de las autodefensas provenía de los negocios del narcotráfico, pero el libro *Pacto en la Sombra* de Edgar Téllez y Jorge Lesmes lanzado a finales del 2005 da cuenta de las reuniones que se hacen entre narcotraficantes y jefes de las autodefensas para acordar caminos comunes de negociación con el estado y con los Estados Unidos.

Al lado de la expansión paramilitar ocurría un fenómeno electoral muy particular. Nuevos movimientos políticos ampliaban su influencia: Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Convergencia Popular Cívica, Movimiento de Renovación Acción Laboral, Moral, Movimiento de Integración Popular, Mipol, Equipo Colombia, Apertura Liberal, Si Colombia, Integración Regional, IR, Alas, Cambio Radical, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Nacional Progresista, Dejen Jugar al Moreno -antes movimiento Defensa Ciudadana- y sectores del liberalismo y el conservatismo. Algunos de los candidatos de estos agrupamientos sin mayor tradición política obtienen altas votaciones. Otros, ya curtidos en las lides electorales, consolidan su registro. En algunas partes se gestan candidaturas únicas a alcaldías y gobernaciones porque los contradictores abandonan la contienda debido a las presiones de los paramilitares.

Para los elecciones de 2006, por efectos de la reforma política que obligó al reagrupamiento de fuerzas, varios de estos grupos tributaron sus huestes a partidos más grandes o se fusionaron para obtener una votación que les permitiera superar el umbral. No obstante algunos mantuvieron su sigla y compitieron con éxito en las elecciones. Se dio también el caso de Colombia Viva que fue disuelto y luego revivido porque varios de sus líderes fueron expulsados en mitad de la campaña del recién formado partido Social de Unidad Nacional al que habían ingresado.

No fue difícil establecer esta relación entre la expansión paramilitar y la configuración de un nuevo mapa político. El mayor control paramilitar se concentró en el norte y el nororiente del país y fue allí donde, de manera más visible, surgieron nuevos grupos o se consolidaron otros. En algunas partes era evidente que algo anormal había ocurrido. Ya todo el país conoce el ejemplo más estrambótico: Eleonora Pineda que saltó de ser concejal del municipio de Tierralta con 700 votos adquiridos en el corregimiento el Caramelo a Representante a la Cámara con más de 82.000 votos, la mayor votación del país para esta corporación. O el de Carlos Arturo Clavijo y Rocío Árias que sin ninguna trayectoria política conformaron una fórmula exitosa para senado y cámara. Como este hay abundantes ejemplos de alteración drástica de la normalidad electoral. En otros muchos casos simplemente se sacó la conclusión de que si los paramilitares habían conquistado el control férreo del lugar era imposible que un político pudiese obtener una votación triunfadora sin un guiño del actor armado ilegal.

Era necesario en todo caso confirmar que se habían establecido alianzas y compromisos entre los políticos y los paramilitares. Varios líderes de las autodefensas reconocieron abiertamente en las entrevistas realizadas por investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris que entre 1999 y 2003 se

habían reunido en múltiples oportunidades con dirigentes políticos para actuar mancomunadamente en el ámbito electoral. Los detalles de estas reuniones fueron contados luego por algunos protagonistas y empezaron a salir en los medios de comunicación del país a finales del 2006.

Negociaciones con las Farc y la expansión paramilitar entre 1999 y 2003

En el proceso de expansión de los paramilitares, especialmente entre 1999 y 2003, logramos documentar su presencia en 223 municipios en la mayoría de los departamentos del país, pero más intensa y decisivamente en 12 departamentos. Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare fueron los más afectados. El énfasis es el norte y el nororiente del país, pero también se expandieron hacia el sur como lo muestran los mapas elaborados por la Corporación. (Ver Mapa 1, pag 9)

El modelo de expansión se puso en práctica en la región de Urabá entre 1995 y 1997 y luego se extendió a todo el país. En Urabá Carlos Castaño ganó su primera gran guerra y supo establecer las alianzas necesarias y obtener la licencia pública que le permitiría dominar la región. Fue una acción envolvente. En corto tiempo acabó con la Unión Patriótica, doblegó a los sindicatos y a las organizaciones sociales e hizo replegar a las Farc a las zonas periféricas de la región.

Un factor que contribuyó al triunfo de Castaño y a la toma de la región por los paramilitares fue el enfrentamiento entre Esperanza Paz y Libertad y las Farc. A principios de los años noventa se había desmovilizado la guerrilla del Epl y se había conformado el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Esta fuerza tenía una gran influencia en los municipios del Eje Bananero. También la tenían las Farc y

la Unión Patriótica. Una vez firmado el acuerdo de paz del Epl empezó una dura disputa entre estas fuerzas. Las Farc se aliaron con una disidencia del Epl y comenzaron una agresión en cadena contra los de Esperanza Paz y Libertad, hecho que significó el asesinato de decenas de militantes y llegó hasta el hecho atroz de enviarle un “libro bomba” a Mario Agudelo, líder del movimiento, que cobró la vida de su hijo. Al principio los de Esperanza intentaron organizar su propia defensa y conformaron “Los Comandos Populares”, pero bien pronto acudieron a la ayuda de Castaño y su gente. La colaboración entre estos dos sectores fue decisiva para el control de la región.

Otro factor importante fue la cooperación de las Fuerzas Armadas en cabeza del general Rito Alejo del Río. Los militares se percataron muy pronto de la eficacia de los métodos de Castaño para arrinconar a las Farc y para liquidar a los militantes de la Unión Patriótica. Le dieron vía libre a la tarea, cosa que conoció el país en los años posteriores cuando este general fue vinculado a procesos penales por los hechos de esa época.

Para mediados de los años noventa ya se presentaba a la región de Urabá como un modelo de pacificación para el país. El costo en vidas había sido inmenso -1456 asesinatos en 1996 y 808 en 1997- según el Observatorio de Derechos Humanos de Vicepresidencia de la República- pero la agitación laboral, el predominio de las guerrillas y el control de las alcaldías por parte de la izquierda habían quedado atrás. Esperanza Paz y Libertad mantenía su destacada participación en los gobiernos locales, pero era claro que lo hacían con la anuencia de Castaño.

Incluso la Iglesia ante la evidencia de que la violencia había cedido en la región y se anunciaba una época de prosperidad, mantuvo cordiales relaciones con las fuerzas paramilitares. Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de la Diócesis

de Apartadó, saludó esta nueva época de Urabá. La legitimación que se derivó de esta actitud de la iglesia fue bien explotada por Carlos Castaño a lo largo de la década del 90.

Los rasgos de este tipo de control político, social y militar sobre la región de Urabá se han hecho visibles en otras regiones, demostrando una fina racionalidad en su expansión. Ganar el pulso de la confrontación militar, buscar la aquiescencia de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, establecer alianzas con los grupos políticos locales o conquistar la presencia directa de dirigentes propios en los puestos de mando, hacer algunas concesiones económicas para afianzar el apoyo social, son características que se repiten a lo largo y ancho del país con mayor o menor éxito. Las monografías regionales orientadas por la Corporación Nuevo Arco Iris dan cabal cuenta de esta situación.²

Quien mejor ha explicado públicamente la estrategia de expansión ha sido Vicente Castaño. “Tu- vimos la avalancha de gente de todo el país pidiendo que lleváramos las autodefensas, eso causó una oleada que se desbordó en una cantidad de acciones armadas sin control en todo el país. Todo el

² *La Corporación Nuevo Arco Iris con el auspicio del gobierno de Suecia adelantó un proyecto de investigación entre finales de 2004 y mediados de 2006 sobre el fenómeno del paramilitarismo y las negociaciones de Santa Fe Ralito. Se trabajó en monografías regionales en Medellín, Córdoba y Urabá, Sucre, El Magdalena Grande, Cundinamarca y Bogotá, Valle, Catatumbo y Norte de Santander, Casanare y Meta. Esta labor estuvo en manos de investigadores regionales y contó con la colaboración de los centros de Estudios de las Universidades de Antioquia, Valle y Magdalena. También se hizo un seguimiento de prensa, documentos y foros públicos y se realizaron entrevistas a los propios actores del proceso de negociación a cargo de un equipo central de investigación con sede en Bogotá. La dirección de la investigación estuvo a cargo de Mauricio Romero y León Valencia. Las características de la expansión y los datos en que se sustentan está tomado de estas monografías.*

mundo comenzó a armar grupos”, dijo. Luego agregaría: “La primera expansión fue con Mancuso. El formó su frente del Sinú y después empezó a expandirse por toda la Costa Atlántica hasta llegar a la frontera con Venezuela”. Luego se refiere a las responsabilidades que asumieron los demás comandantes en la expansión y señala las tareas del Bloque Central Bolívar y de Diego Murillo alias “don Berna” en el centro y el sur del país.³ Posteriormente da detalles de lo que el llama la última etapa de la expansión, los territorios donde sólo había narcotráfico y narcotraficantes. Muestra como en Arauca la tarea quedó en manos de Víctor y Miguel Angel Mejía, más conocidos como los Mellizos. En el Valle y norte del Cauca en manos de Gabriel Galindo alias “Gordo Lindo”. En Meta y Casanare bajo la dirección de Miguel Arroyabe.

Una versión muy parecida de la expansión la dio Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” a Mauricio Romero y León Valencia en una larga entrevista en marzo de 2005. Decía Báez que a lo largo de 1999 y en los años siguientes la cúpula de las autodefensas empezó a reunirse con dirigentes políticos regionales, con narcotraficantes, con empresarios, con algunos militares, que acudían a buscar colaboración para establecer fuerzas paramilitares en múltiples sitios del país. Aportaban dinero, armas, contactos en las regiones. El argumento que esgrimían para buscar estos acuerdos era el miedo a que se estableciera un pacto definitivo entre el gobierno del presidente Pastrana y las Farc. Todos estos sectores se sentían amenazados por estas negociaciones.

En las monografías realizadas en el marco de la investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris se detallan las características que asumió la expansión en cada región. Queremos citar los ejemplos de Medellín, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Arauca y Magdalena Medio por las características especialmente políticas que tuvieron.

³ Entrevista de Vicente Castaño con Alejandro Santos. Revista Semana, Junio 6 de 2005.

En Medellín Diego Murillo Bejarano alias “don Berna” ganó varias confrontaciones: a las Farc y al Eln, a la banda La Terraza y finalmente al Bloque Metro. El punto más alto en los homicidios fue el 2001 cuando la ciudad llegó a tener 220 asesinatos por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de América Latina sólo explicable por una verdadera situación de guerra.⁴ Se estableció así un control sobre la seguridad de la ciudad y una influencia decisiva en los nichos electorales de las comunas y en municipios de la zona metropolitana como Envigado y Bello.

En el Magdalena el Bloque Norte llega en el año 2000 y subordina a todas las estructuras paramilitares ya existentes y al mismo tiempo somete sin mayor resistencia a los dirigentes políticos y a los poderes locales fraguándose una de las más extensas alianzas políticas de que se tenga noticia. Castaño ya le había ganado un pulso militar a Hernán Giraldo y en los años precedentes se habían presentado masacres, desapariciones y desplazamientos. Lo que llevó a que en ese momento la ocupación fuera, si se permite el término, “blanda”.

En Norte de Santander la llegada se produce en agosto de 1998 con la ronda de muerte en la carretera entre el municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, atribuidas a fuerzas bajo el mando directo de Salvatore Mancuso. Luego se acentúa en Cúcuta donde son asesinados Tirso Vélez candidato a la alcaldía y el ex alcalde Pauselino Camargo. El control político de la capital y de la mayoría de los municipios se hizo patente entre el 2002 y el 2003.

Al Meta los paramilitares llegan en julio de 1998 en dos aviones fletados en Urabá repletos de hombres armados, quienes producen la brutal masacre de Mapiripán, y desde allí se extienden a varios mu-

⁴ El general Jorge Daniel Castro hace una valoración de la situación de seguridad en Medellín. Diario El Colombiano. Medellín, 3 de enero de 2007.

nicipios, incluida su capital Villavicencio. En las elecciones de 2002 y 2003 es palpable su influencia en ese departamento. El caso más escandaloso se presenta en las elecciones regionales donde al principio existían cinco candidatos a la gobernación e hicieron renunciar a tres de ellos y luego, después de pasados los comicios, asesinaron al candidato perdedor que no obedeció la orden de retirada.

A Arauca los paramilitares llegaron por Tame, el segundo municipio más rico del departamento, cercano al pie de monte y a la frontera con el Casanare. Por allí ingresó Víctor Manuel Mejía Munera, conocido luego como “Pablo Arauca”, en 2001 al mando del Bloque Vencedores de Arauca, que hacía parte del Bloque Central Bolívar. A su llegada los paramilitares se hicieron sentir. Asesinaron a dos congresistas de ese departamento – Alfredo Colmenares y Octavio Sarmiento- ambos oriundos de Tame. En el 2000 este municipio tuvo 43 muertes violentas, en el 2001 la cifra ascendió a 74, en el 2002 llegó a 138, en el 2003 fueron 210 homicidios y el 2004 se cerró con 202 crímenes. Así mismo en los últimos cinco años ocurrieron 16 masacres en este municipio y más de 7.000 personas fueron desplazadas. La intención política era clara y la incidencia para gobernación y alcaldías en el 2003 fue decisiva.

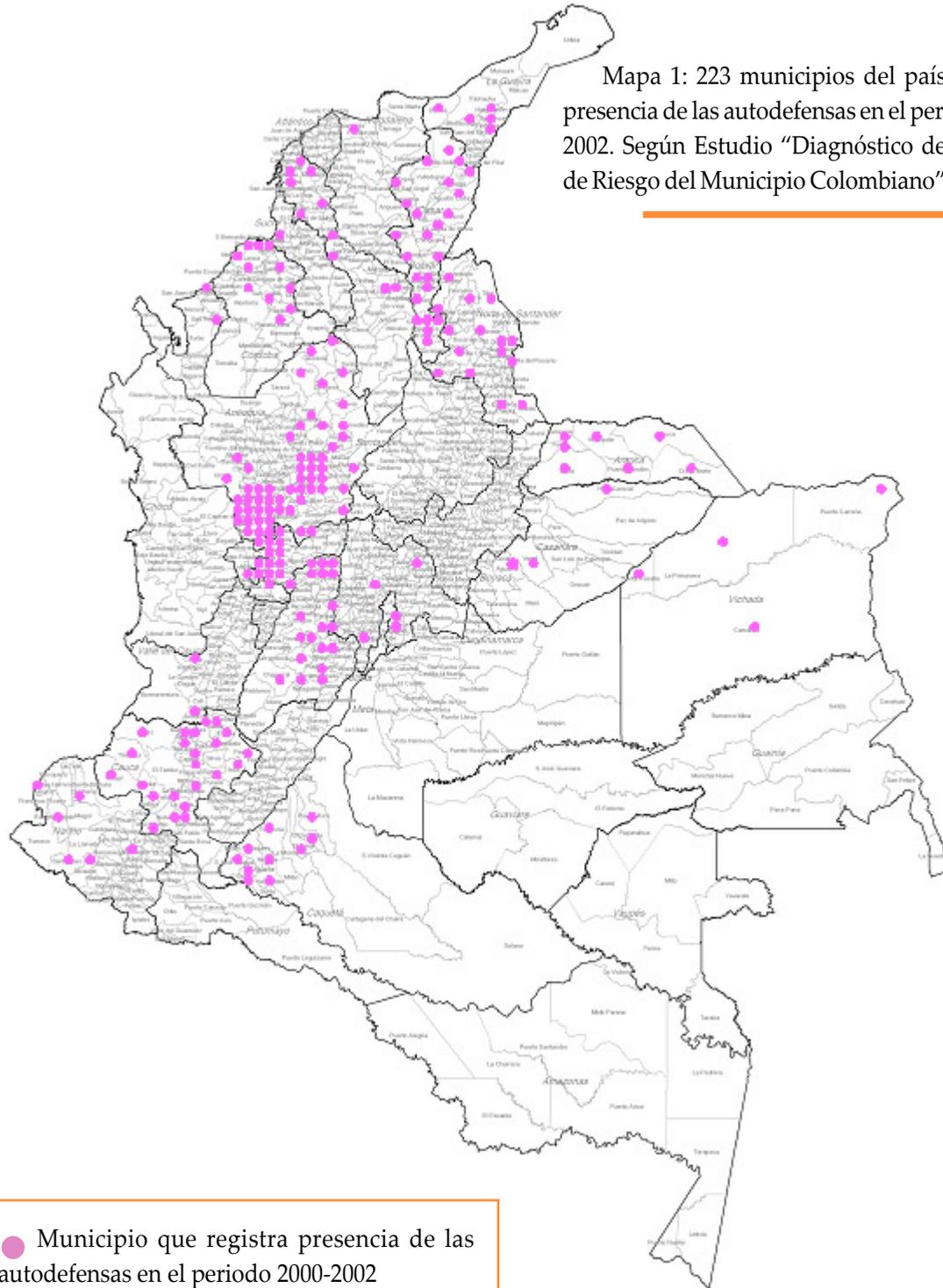
En el Magdalena Medio y el sur de Bolívar le ganaron la guerra al Eln, impusieron su dominio en la mayoría de los municipios de la región lo que les permitió hacer grandes movilizaciones campesinas para impedir las negociaciones de esta guerrilla con el gobierno del presidente Pastrana. Se tomaron a Barrancabermeja, influyeron decisivamente en las elecciones parlamentarias del 2002 y se hicieron a la alcaldía del municipio.

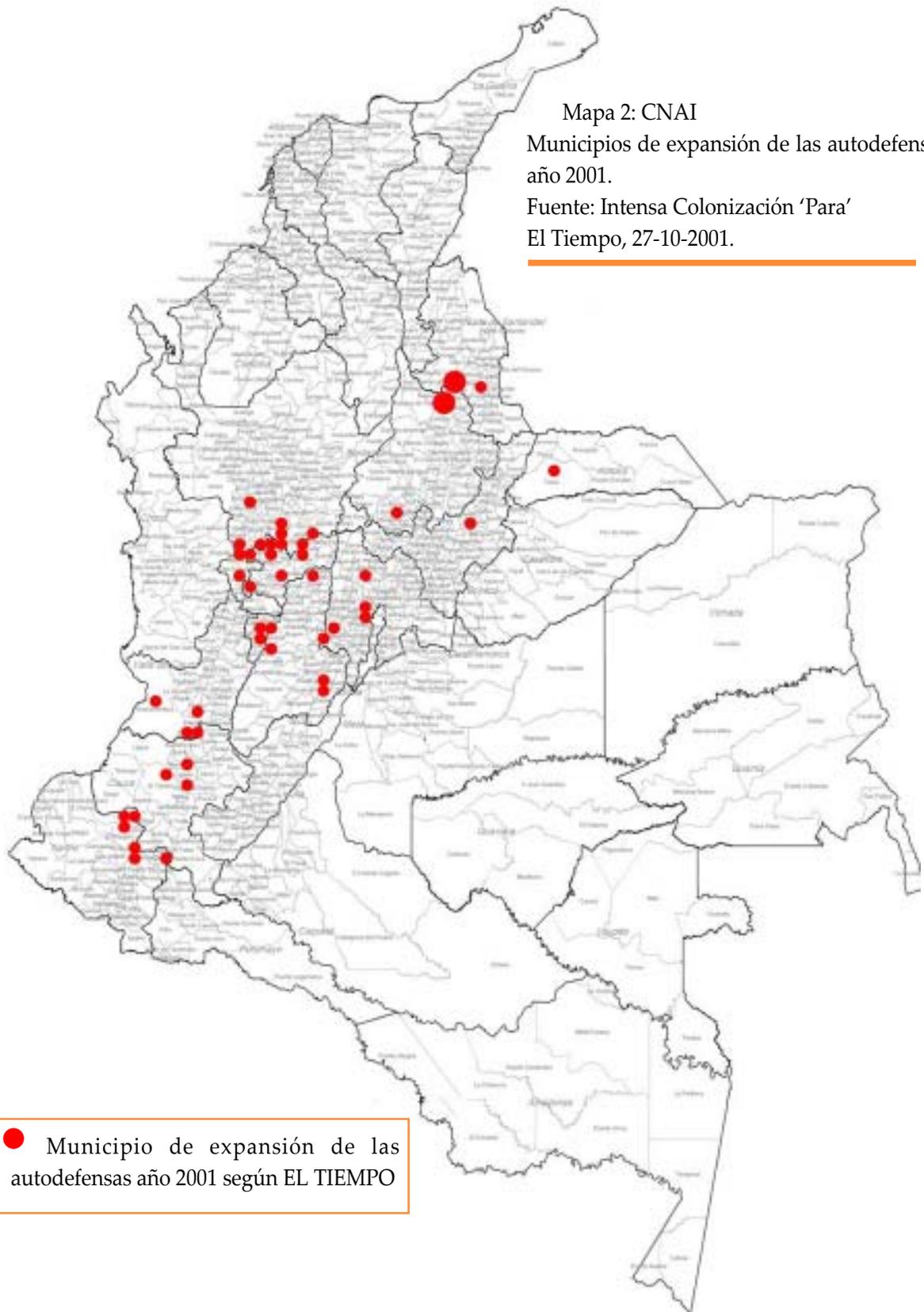
Al mirar una por una las monografías y al explorar los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República y el texto de Juan Carlos Garzón publicado en el libro

El poder paramilitar, encontramos que el pico más alto de la expansión lo tiene el año 2001 precisamente en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2002 y en el mismo tiempo en que se estaba firmando el gran pacto político de julio entre la cúpula paramilitar y un gran número de dirigentes políticos. El diario El Tiempo registró alarmado en la edición del sábado 27 de octubre de 2001 en un documentado artículo que “las autodefensas están empezando a copar ciudades intermedias y a establecer corredores alrededor de las capitales incluida Bogotá. El crecimiento es el más grande en diez años”. El artículo de El Tiempo hacía particular énfasis en la expansión hacia el centro y el sur del país. Entre enero y octubre de ese año tomaron posesión de 47 municipios de 13 departamentos, dice El Tiempo. (Ver Mapa 2, pag 10.)

Vistas las cosas desde hoy se puede ver que el crecimiento y la expansión fueron realmente asombrosos. En 1998 después de la unidad de los grupos, los efectivos de las autodefensas eran 6.000 según declaraciones del propio Castaño. En el 2006 cuando culminó la desmovilización parcial, en el marco de las negociaciones con el presidente Uribe, se contabilizaron 31.000 efectivos de 37 estructuras que entregaron 17.000 armas.

Mapa 1: 223 municipios del país registran presencia de las autodefensas en el periodo 2000-2002. Según Estudio "Diagnóstico de situación de Riesgo del Municipio Colombiano" de CNAI.





El aporte de las Convivir a la expansión paramilitar

La contribución de las cooperativas Convivir a la configuración de las Autodefensas Unidas de Colombia y a la expansión paramilitar fue discutida durante largo tiempo en las organizaciones de derechos humanos y en los grupos académicos. En un principio apareció más como una acusación política que como una realidad. Dado que fue el hoy presidente Álvaro Uribe Vélez su principal promotor cuando oficiaba como gobernador de Antioquia, las afirmaciones de que las Convivir habían sido decisivas para dar un salto en el crecimiento del paramilitarismo se entendían como una ataque político a la persona de Uribe. Pero Salvatore Mancuso vino a despejar todas las dudas en el libro que hizo con la periodista Glenda Martínez.

Allí Mancuso cuenta la historia detallada de las Convivir y la periodista la recoge así “Con las Convivir y la posibilidad de replicarlas entre los ganaderos que le habían pedido apoyo en Cesar y Sucre, Mancuso se concentró en fortalecer su propia organización. Rodrigo Tovar Pupo sería la cabeza en el Cesar, mientras que Diego Vecino, un paisa criado en Puerto Berrío, con intereses ganaderos en Valencia, con quien había compartido cuadra en el barrio La Castellana, se encargaría de Sucre. Convencido de las bondades de este instrumento legal para defenderse, siguió como muchos otros en Colombia, asesorando la organización de ganaderos –a nivel nacional llegaron a ser 414-, un proceso que se interrumpiría a mediados de 1996, cuando Alfonso Valdivieso emitió la primera orden de captura en su contra, acusado del homicidio de Dagoberto Santeiro, en la vereda El Martillo, en Sucre”.⁵ Mancuso pasó entonces a la clandestinidad. Luego el 7 de noviembre de 1997, la Corte Constitucional declaró inexecutable el Decreto 356 de 1994, que dio

⁵ Martínez, Glenda. *Mancuso, Su Vida. Grupo Editorial Norma. 2004.*

origen a los servicios especiales de vigilancia privada, Convivir. En esa sentencia el alto tribunal despojaba a esas organizaciones de la facultad de utilizar armas y les quitaba buena parte de las funciones de control y vigilancia que habían ejercido debido a los incontables atropellos que estaban cometiendo. Gran parte de los jefes y de los miembros de estas organizaciones se fueron a acompañar a Mancuso en las Autodefensas Unidas de Colombia.

Pero hay más. Las Convivir estaban plenamente articuladas al proyecto de las autodefensas desde su fundación. Es decir, no sólo fueron la cantera donde los paramilitares reclutaron una parte de sus integrantes para su gran expansión una vez les quitaron el respaldo legal, sino que, en el tiempo en el que contaron con la anuencia de las instituciones del Estado, también hacía parte de la estrategia paramilitar. Mancuso le cuenta a Glenda Martínez que por los días en que él estaba tramitando la posibilidad de un marco legal para desarrollar las cooperativas de seguridad se encontró con Vicente Castaño en la finca Las Tangas y en esa tarde “se crearon las bases de lo que serían las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba”. La reflexión de Castaño era que la guerra había entrado en una nueva etapa y que esto exigía una coordinación y concentración de fuerzas, hombres, armas y municiones. Los Castaño se encargarían de la parte ilegal y Mancuso por un tiempo se dedicaría a utilizar las cooperativas amparadas legalmente. Es decir, las denuncias de las organizaciones de derechos humanos estaban bien encaminadas.

¿Por qué confluyeron paramilitares y políticos?

Desde el principio quisimos encontrarle una explicación sociológica y política a los acontecimientos ocurridos entre 1999 y 2003 y luego comprender también lo ocurrido en el 2006. Queríamos –además de demostrar que la motivación de la expansión paramilitar no era salvar al país del

demonio guerrillero- saber las razones de una movilización política tan grande de significativos sectores de la sociedad política colombiana. Queríamos desvirtuar la calificación de “conspiración” de un pequeño grupo, o hechos aislados, que comúnmente le dan a estos acontecimientos sectores de la dirigencia del país.

En los documentos emanados de las reuniones paramilitares y en las profusas declaraciones de Carlos Castaño después de 1997, era claro que el esfuerzo militar realizado por los paramilitares, la violenta ocupación del territorio, su inmersión completa en el mundo del narcotráfico, tenía, además de la motivación de enriquecimiento personal de los jefes, una clara intencionalidad política: buscar una negociación con el Estado. Bastaría con el siguiente texto emanado de la cumbre donde se fundan Las Autodefensas Unidas de Colombia en mayo de 1998 para aclarar la misión de las fuerzas paramilitares: “Definir las Autodefensas Unidas de Colombia como un movimiento político- militar de carácter anti-subversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”.⁶

Iván Roberto Duque cuenta como fue este proceso. Dice Duque que cuando él salió de la cárcel se encontró con Carlos Castaño en un hotel de Bogotá y Castaño ya tenía la obsesión de buscar el agrupamiento de todas las fuerzas paramilitares. Había encontrado en la muerte de su padre a manos de las Farc un relato que legitimaba su acción. Duque le planteó las limitaciones de esta historia. Le insistió en que la venganza no era suficiente para legitimar un proyecto de lucha por el poder.⁷

⁶ Castaño, Carlos. *Op.Cit.*

⁷ Entrevista a Iván Roberto Duque por Mauricio Romero y León Valencia. Participó también Julián Bolívar jefe militar del Bloque Central Bolívar de las autodefensas quién dio detalles especiales de la expansión paramilitar. Marzo de 2005.

Andando el tiempo convinieron en que dedicarían un espacio importante a construir un discurso más elaborado sobre la misión de los paramilitares. Durante un año, todas las mañanas, Iván Roberto Duque y Hernán Gómez, se dieron a la tarea de leer y discutir con Castaño uno a uno los más diversos temas que debían componer esta puesta en escena de un proyecto político. El examen fueron las entrevistas que Castaño les concedió a Darío Arismendi del programa Cara a Cara de Caracol televisión y a Claudia Gurisati del canal RCN. Tanto Arismendi como Gurisati, que no sabían el largo proceso de preparación de la presentación en público de Carlos Castaño, se sorprendieron como todo el país con la retórica y las habilidades del entrevistado.

El discurso de Castaño era más que fluido, era torrencial. Con una agilidad mental asombrosa fue hilando un argumento tras otro hasta darle forma a la idea fuerza con la que habría de jalonar la expansión del paramilitarismo por todo el país. Se trataba de un gran proyecto “contrainsurgente”. La misión era derrotar la guerrilla. Liberar el norte del país primero y luego marchar hacia el sur.

El relato no podía ser más eficaz. El miedo a la guerrilla había crecido en esos años, también el odio por la escalada de secuestros, extorsiones y ataques a la población civil. La desconfianza en las instituciones se había incrementado. La percepción era que el Estado era incapaz de derrotar a la insurgencia y en algunas regiones había claudicado ante ella. Y ahí estaban un líder y una organización proclamando su decisión de detener el avance guerrillero. La mitificación fue rápida. Nadie se volvió a acordar que la familia Castaño venía de las entrañas del cartel de Medellín, nadie volvió a preguntar por la “clase emergente”, nadie volvió a indagar por las razones del inusitado crecimiento del tráfico de drogas y la proliferación de cultivos de coca en las zonas de expansión de los paramilitares, muy

pocos pusieron los ojos en las horrendas masacres y en las fosas comunes que se abrían al paso de los paramilitares. El rótulo contrainsurgente lo tapaba todo.

El discurso contrainsurgente era la carta de presentación para esta negociación. Pero necesitaban igualmente una amplia cobertura política y eso sólo podrían obtenerlo recurriendo a la clase política regional. El orgullo y la satisfacción con que Salvatore Mancuso y Vicente Castaño reconocieron luego que tenían vínculos directos con el 35 por ciento del Congreso confirmarían el empeño que habían puesto en la tarea de asociarse con la clase política. También Iván Roberto Duque en las entrevistas había planteado que una negociación con las elites nacionales sólo era posible si conquistaban un gran apoyo regional, bien directamente o a través de la clase política regional.

Defensa del status quo y autoritarismos regionales

Ahora bien, las elites regionales tenían el interés de oponerse a un pacto con las guerrillas y también el propósito de desatar una gran resistencia a los cambios democráticos que trajo la Constitución del 91. El trabajo del profesor Edward Gibson, de la Universidad Northwestern, en los Estados Unidos, nos permite entender algunos comportamientos locales de la clase política en Colombia a finales de los años noventa y principios del siglo XXI.⁸ Gibson da pistas para entender la razón por la cual esa clase política se diseminó en pequeños partidos de alcance regional, la motivación que tuvo para apelar a una alianza con los paramilitares, la resistencia a las negociaciones de paz con las guerrillas y a los procesos de de-

⁸ Gibson, Edward, "Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos", *DESAFÍOS # 14*, Centro de Estudios Políticos e Internacionales, CEPI, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006.

mocratización local facilitados por el marco constitucional de 1991 y la descentralización.

Gibson logra sustentar la tesis de que en muchos regímenes democráticos se presentan enclaves autoritarios en las provincias, lo que llama "autoritarismos subnacionales". Trae ejemplos de varios países donde a pesar de haberse producido un salto en el pluralismo y la competencia política a nivel nacional, se presenta una precaria apertura democrática en las regiones, una permanencia de elites autoritarias que controlan férreamente el poder en las provincias.

Incluso hay un hecho paradójico que describe bien Gibson. En momentos de transición democrática, cuando en el centro político se producen cambios importantes de signo democrático, en la periferia las elites tienden a acentuar el autoritarismo, desarrollan estrategias duras de control territorial, acentúan la antidemocracia, capturan el poder local, como forma de resistir los cambios ocurridos a nivel nacional.

Señala Gibson:

"En un país democrático a nivel nacional o en proceso de democratización, la preservación del autoritarismo subnacional es ampliamente un producto de estrategias territoriales perseguidas por las elites políticas locales. En respuesta a los retos (u oportunidades) ofrecidas por la democratización nacional, las elites autoritarias subnacionales adelantan estrategias que maximizan los siguientes valores: control, autonomía y poder o influencia - esto es, control sobre actores políticos en la provincia, autonomía de influencias nacionales, y poder sobre líderes políticos nacionales. Estos son valores defendidos por elites periféricas en el poder, en cualquier contexto de relaciones centro-periferia, sean esas elites autoritarias o democráticas. Estos son valores que reflejan también el balance de poder entre centro y la periferia".⁹

⁹ *Ibid.*, pag. 213-214.

Como respuesta a los avances democráticos que trajo la Constitución de 1991 y también como reacción ante las posibilidades de un acuerdo de paz con las guerrillas que impulsó el gobierno de Andrés Pastrana, las elites regionales, especialmente las vinculadas al partido liberal, constituyeron grupos políticos regionales con férreo dominio territorial y buscaron acuerdos con los paramilitares, forjando verdaderas dictaduras locales. Así mismo apoyaron estrategias de negociación con las elites nacionales para buscar un reacomodo del mapa político nacional. El examen juicioso de los cambios en la política regional y en la evolución de los paramilitares permite ver que hubo importantes coincidencias entre estas fuerzas que las llevaron a una alianza, a una coalición voluntaria, con propósitos comunes.

La reforma política de principios de los años noventa con la apertura al pluralismo político, la circunscripción nacional para Senado y elementos de modernización del Estado, potenció enormemente el voto de opinión y los liderazgos políticos nacionales. La clase política se atrincheró entonces en las regiones, dio origen a nuevos grupos, buscó procesos de asociación entre regiones y echó mano de la ayuda que le ofrecían los paramilitares. Lograron en muchos lugares darle una verdadera bofetada al voto de opinión y a los liderazgos más cultos e instruidos de Bogotá y de ciudades importantes. La realidad es que no dejaron operar en la práctica la circunscripción nacional de Senado y mantuvieron el carácter regional de buena parte de los senadores. Grupos políticos que nadie conocía, personas de las que nadie sabía, resultaron de la noche a la mañana con grandes votaciones.

En la medida en que los paramilitares fueron entrando en relación con la clase política regional también fueron haciendo su discurso más sofisticado y más comprensivo de los intereses de las elites regionales. El discurso con el cual Salvatore Mancuso oficializó su desmovilización habla de la

odiosa centralización y reclama un tipo de autonomía regional que caza bien con la resistencia que la clase política ha hecho a la constitución del 91. Dice Mancuso: “El resultado de un pacto de paz final, con todos los actores armados en algún futuro cercano, nos llevara sin duda a replantear nuestro marco político institucional. Colombia no podrá postergar el anhelo regional de una mayor autonomía. Sueño con ver pronto una Colombia federal, con autodeterminación regional, unida por lazos culturales e históricos comunes, pero al compás de la tendencia universal, que vincula provechosamente la pertenencia a la aldea global, con la vivencia cotidiana de lo local y regional. El centralismo está vivo y nos agobia. La ausencia del estado que permitió el terror de la guerrilla y el posterior nacimiento de la autodefensa, surge del modelo centralista que sólo mira el ombligo de la nación, olvidando las penurias del resto del cuerpo¹⁰”.

Ya esta idea de cambiar el marco constitucional había quedado consignada en el documento que habían suscrito algunos mandos de las autodefensas con un gran número de dirigentes políticos en julio de 2001 donde hablaban de “refundar el país”.

La investigación se dirigió entonces a establecer en cuales territorios había logrado una mayor presencia el paramilitarismo y también a examinar el desenvolvimiento de los movimientos políticos en esos lugares. Qué alteraciones había en el comportamiento político. Qué partidos se fortalecían y cuáles se debilitaban. Qué variaciones se presentaban en las elecciones. Para hacer más fácil la indagación concentramos la exploración en la disputa por el Senado de la República. Entendíamos que si podíamos desentrañar la forma como los paramilitares habían influido en la composición del Senado podríamos saber también su injerencia en la Cámara y en los espacios regionales. Ir a la cumbre de la pirámide y

¹⁰ *Discurso de Salvatore Mancuso, diciembre de 2005. En <http://www.salvatoremancuso.com>*

devolverse para mirar la base. Partíamos precisamente de la idea de que la clase política había logrado mantener la costumbre de agruparse alrededor de un senador de carácter regional. Veíamos que habían logrado que ni la elección popular de alcaldes y gobernadores y la circunscripción nacional para Senado torcieran esa costumbre.

Las elecciones del 2002 cambian la historia política del país

El punto de llegada de la investigación nos dio esta realidad: en las elecciones del 2006, 33 senadores y sus fórmulas a la cámara resultaron elegidos en zonas de control paramilitar. Estos senadores obtuvieron 1.845.773 votos que representan una tercera parte de la votación para Congreso y un punto muy alto de la votación para presidente. La gran mayoría de estos senadores habían sido elegidos en los nuevos grupos que aparecieron en el 2002. Hay allí una continuidad de lo ocurrido entre las anteriores y estas elecciones.

Los analistas políticos y los medios de comunicación a primer golpe de vista el lunes después de las elecciones parlamentarias de marzo de 2006 proclamaron la disminución sensible de la influencia de los paramilitares en la política. No fue así. Una comparación juiciosa entre lo ocurrido en el 2002 y lo ocurrido en el 2006 nos ha permitido concluir que sólo hubo algunas variaciones que en vez de atenuar el fenómeno lo profundizaron. Habíamos documentado la elección de 26 senadores en zonas paras en el 2002 que pusieron 1.741.947 votos (Ver Anexo 1). En el 2006, estos partidos distribuyeron mejor y más racionalmente la votación, con la cual lograron siete senadores más con una votación no muy diferente a la de 2002. Es decir, en el 2006 aumentaron los senadores casi con la misma votación. (Ver Anexos 1 y 2).

Queremos que los lectores vean claramente en los cuadros el nombre del senador, el partido por el que salió elegido y los municipios donde obtuvo

las más altas votaciones. Destacamos el hecho de su inscripción en terceros partidos y la obtención de un caudal importante de votos en los municipios o zonas donde había un notorio control paramilitar (Ver anexo 1).

En las elecciones de Senado del 2006 (Ver Anexo 2) es visible la continuidad que tienen muchos senadores que irrumpieron en la acción política en el 2002. También la persistencia de algunos movimientos de los que surgieron o se consolidaron en esos comicios.

En el cuadro de representantes a la Cámara del 2006 acudimos también a buscar la coincidencia de los lugares de votación con los lugares de expansión paramilitar, pero también hicimos el esfuerzo de tratar de descubrir con qué senador habían hecho fórmula o a cual le habían aportado más votos. (Ver Anexo 3 y Mapa 2)

En el 2002 se produjeron varios fenómenos que no han sido debidamente analizados y que cambiaron el curso de la política colombiana. El Partido Liberal y el Partido Conservador sufrieron importantes desprendimientos y se conformaron o se consolidaron varios partidos o grupos políticos nuevos. Estos dos partidos históricos perdieron las mayorías en el Congreso. Algunos de esos nuevos grupos cumplían la función de dar cabida a líderes políticos primerizos que saltaron a la vida pública de la mano de la expansión paramilitar. Otros, simplemente, le permitían a líderes tradicionales salirse del juego de las grandes colectividades para establecer con mayor libertad sus compromisos regionales y organizar su votación en el marco de las transacciones con las autodefensas. En este contexto se produjo un hecho que no tenía antecedentes en todo el siglo veinte: un candidato disidente del partido liberal derrotó al candidato oficial por un margen escandaloso de votos.

COMPOSICIÓN POLÍTICA SENADO DE LA REPÚBLICA
1998-2006

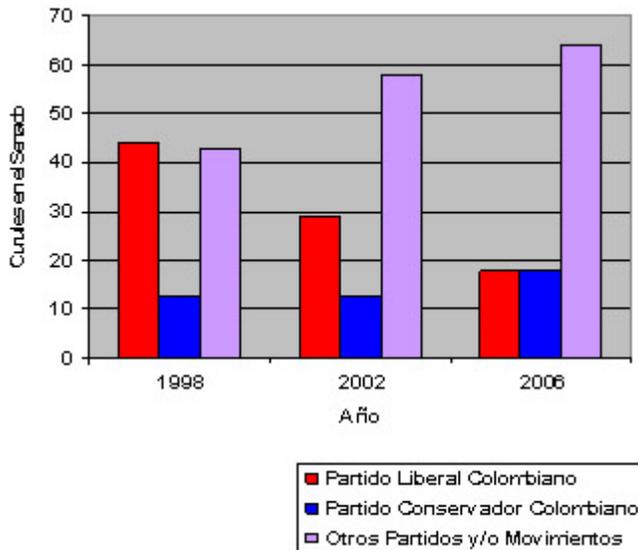


Gráfico 1: Partidos oficiales y terceros partidos en el Senado de la República.

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado - Corporación Nuevo Arco Iris -

PORCENTAJE DE VOTACIONES Y CURULES DEL PARTIDO
LIBERAL 1998-2006

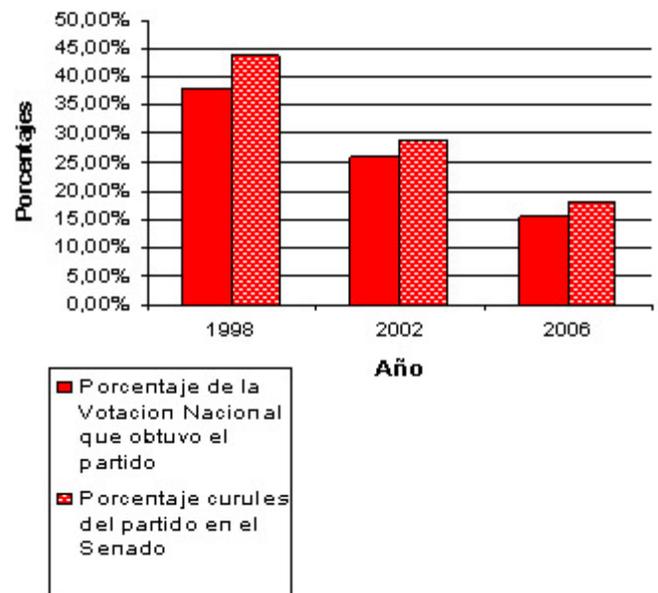


Gráfico 2: Comportamiento del Partido Liberal en el Senado de la República 1998-2006

Fuente: Observatorio del Conflicto Armado - Corporación Nuevo Arco Iris -

Entre tanto, en las regiones ocurrían cambios paralelos. En el Magdalena surgió el Movimiento Renovación Acción Laboral, Moral, el cual se extendió a varios lugares de la costa, llegó a Antioquia y eligió al senador Mario Uribe con una alta votación, pero no pudo elegir a Miguel Pinedo Vidal que se quemó por pocos votos. Entre el 2002 y el 2006 este movimiento se transformó en Colombia Democrática bajo la dirección de Mario Uribe. Pero aún así la sigla de Moral siguió existiendo y en el 2006 sirvió para dar cobijo a Karelly Lara quien llegó a la Cámara por el Magdalena acompañando a Pinedo Vidal para el Senado. Este finalmente migró hacia Cambio Radical.

En Córdoba surgió el Movimiento Popular Unido -Mpu- que llevó al congreso a Miguel de la Espriella y a Eleonora Pineda, también a Juan Carlos Sinisterra en el Valle del Cauca y su fórmula

la a cámara. De las listas de este grupo hacían parte también David Turbay Turbay y Rodolfo González García, protagonistas del proceso 8.000, quienes no resultaron elegidos. En el Bajo Cauca Antioqueño y en todo el Magdalena Medio hasta los departamentos de Caldas y Boyacá apareció Convergencia Popular Cívica que eligió la fórmula de Carlos Arturo Clavijo al Senado y Rocío Arias a la Cámara con votación en Antioquia y Santander, lo mismo que a Oscar Iván Zuluaga al Senado con votación mayoritaria en Caldas.

Como se observa estos grupos reúnen a personas con grandes distancias territoriales y a las que no es fácil encontrarles un pasado en común. ¿Qué lazo podía existir entre Carlos Clavijo un hombre del campo de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, con Oscar Iván Zuluaga un empresario de Caldas? ¿Cómo se juntaron Eleonora

Pineda del corregimiento El Caramelo en Tierralta Córdoba, Juan Carlos Martínez del Norte del Valle y David Turbay Turbay?

En los santanderes Convergencia Ciudadana, bajo la dirección del senador Luís Alberto Gil, cambió la relación de fuerzas en los dos departamentos colocando en minoría a los partidos liberal, conservador y la Anapo. Para el 2006 este movimiento se convertiría en el más grande fenómeno político eligiendo siete senadores y ocho representantes de manera directa. Logrando además una alianza con Apertura Liberal que sólo presentó candidatos a la cámara en la Costa Atlántica y eligió una bancada de cinco. También se sabe de lazos muy estrechos de este partido con parlamentarios de la U y con el representante de Opción Centro un grupo que llegó al congreso por circunscripción de minorías. El caso es que para la elección de un representante al Consejo Electoral en el 2006 Convergencia Ciudadana logró reunir una bancada de veintiocho parlamentarios que dejó boquiabiertos a los demás partidos.

En Sucre, entre tanto, Cambio Radical eligió a Jairo Enrique Merlano como senador de la república en coalición con la representante conservadora Muriel Benito Rebollo. También eligió al Senado a Rubén Darío Quintero de Antioquia con votos de zonas de evidente control paramilitar. En Casanare y Meta tuvo candidatos como Miguel Ángel Pérez involucrado en varios procesos judiciales. Cambio Radical había sido fundado en el año 98 por dirigentes como Rafael Pardo y Claudia Blum, y sufrió muchas transformaciones después del 2002 con la llegada de Germán Vargas Lleras, quien había sido elegido por el movimiento Colombia Siempre. Vargas Lleras tomó las riendas del partido, consolidó las alianzas regionales establecidas y le dio un gran impulso hasta colocarlo como el segundo partido uribista.

PORCENTAJE DE VOTACIONES Y CURULES DEL PARTIDO CONSERVADOR 2006

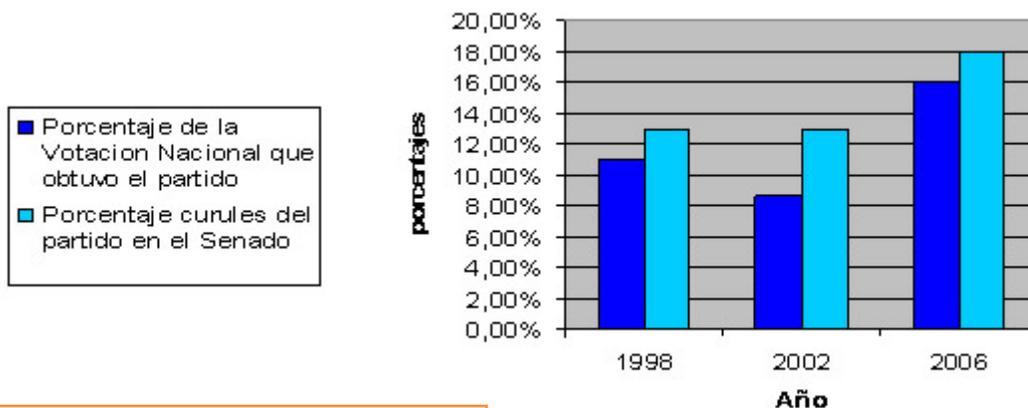


Gráfico 3: Comportamiento del Partido Conservador en el Senado de la República 1998-2006
Fuente: Observatorio del Conflicto Armado -Corporación Nuevo Arco Iris -

En los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira tomaron fuerza el Movimiento de Integración Popular -Mipol- que eligió a Dieb Malof, Vicente Blel Saade, Luís Vives Lacouture y Mario Salomón Náder como senadores. El Movimiento Alternativo de Avanzada Social, Alas, fue otro de los movimientos nuevos y eligió a Álvaro Araujo Castro como senador en coalición con el representante Miguel Ángel Durán Gelvis de Integración Regional, IR.

El Movimiento Nacional Conservador fue otro de los grupos que se independizó de los dos partidos históricos y llevó al Senado a Gabriel Acosta Bendek, William Alfonso Montes Medina, Juan Manuel Corzo y Javier Enrique Cáceres. A su vez, el Movimiento Nacional Progresista eligió a Álvaro García Romero. En este caso fue evidente que dirigentes políticos con origen conservador que tenían la certeza de obtener votaciones importantes en zonas de control paramilitar decidieron desprenderse de su partido original y tomar una sigla nueva que les serviría para organizar más racionalmente su accionar político. El caso de Javier Enrique Cáceres es muy especial porque llegó en 1998 al congreso en nombre del Partido Liberal, buscó su reelección en el 2002 con el Movimiento Nacional Conservador, luego se incorporó a las filas del Polo Democrático por un corto tiempo y aterrizó en Cambio Radical en las elecciones de 2006. Este deambular lo combinaba hábilmente con la organización periódica de debates sobre la corrupción en el congreso nacional. Es evidente que ha tenido una clara intención de mimetizarse en cada elección. Para el 2006 los nombres de Movimiento Nacional Conservador y de Movimiento Nacional Progresista desaparecieron y sus miembros se sumaron a diversos partidos de la coalición uribista.

También en esa zona de la costa saltaron al protagonismo Sí Colombia y Apertura Liberal, los cuales eligieron varios parlamentarios que cambiaron la relación de fuerzas políticas de la región.

Equipo Colombia con base inicial en Antioquia se extendió a varias regiones del país y colocó una sorprendente bancada parlamentaria. Dejen Jugar al Moreno mantuvo su votación en Bogotá y se extendió a algunas zonas de la costa.

En algunos de estos partidos como Cambio Radical o Equipo Colombia se produce una coalición entre líderes con voto de opinión, con una tradición política muy respetable, como Germán Vargas Lleras y Alfredo Ramos, con dirigentes claramente asentados en zonas paramilitares y evidentemente comprometidos con las estrategias de las autodefensas. Lo mismo se podría decir de Oscar Iván Zuluaga y de otras personas que quedaron inmersas en el movimiento Convergencia Popular Cívica. Lo que nos preguntamos en estas constataciones es si se dieron cuenta o no de las fuerzas políticas que estaban fortaleciendo. Quizás los líderes regionales con algún compromiso con los paramilitares simplemente buscaron una buena cobija para desarrollar su proyecto. Son cosas que las investigaciones penales dirán. También hay un caso muy especial en el Partido Liberal, el de Juan Manuel López Cabrales. Este dirigente regional tuvo momentos de gran tensión con las fuerzas paramilitares que hicieron temer por su vida, pero después de Julio de 2001 vivió un momento de distensión que le permitió sacar una alta votación para su movimiento en el 2002 y en el 2003 y acrecentarla aún más en el 2006.

En muchos departamentos estos nuevos partidos se presentaron a las elecciones en coalición con dirigentes liberales y conservadores que no quisieron o no tuvieron necesidad de salirse de estas colectividades para establecer estrategias comunes con fuerzas vinculadas a los paramilitares. Es el caso de Juan Manuel López, de Guillermo León Gaviria Correa y Habib Mereg Marún del Partido Liberal o de Ciro Ramírez y de Julio Alberto Manzur Abdala, en el Partido Conservador.

Terceros Partidos en el Senado 1998

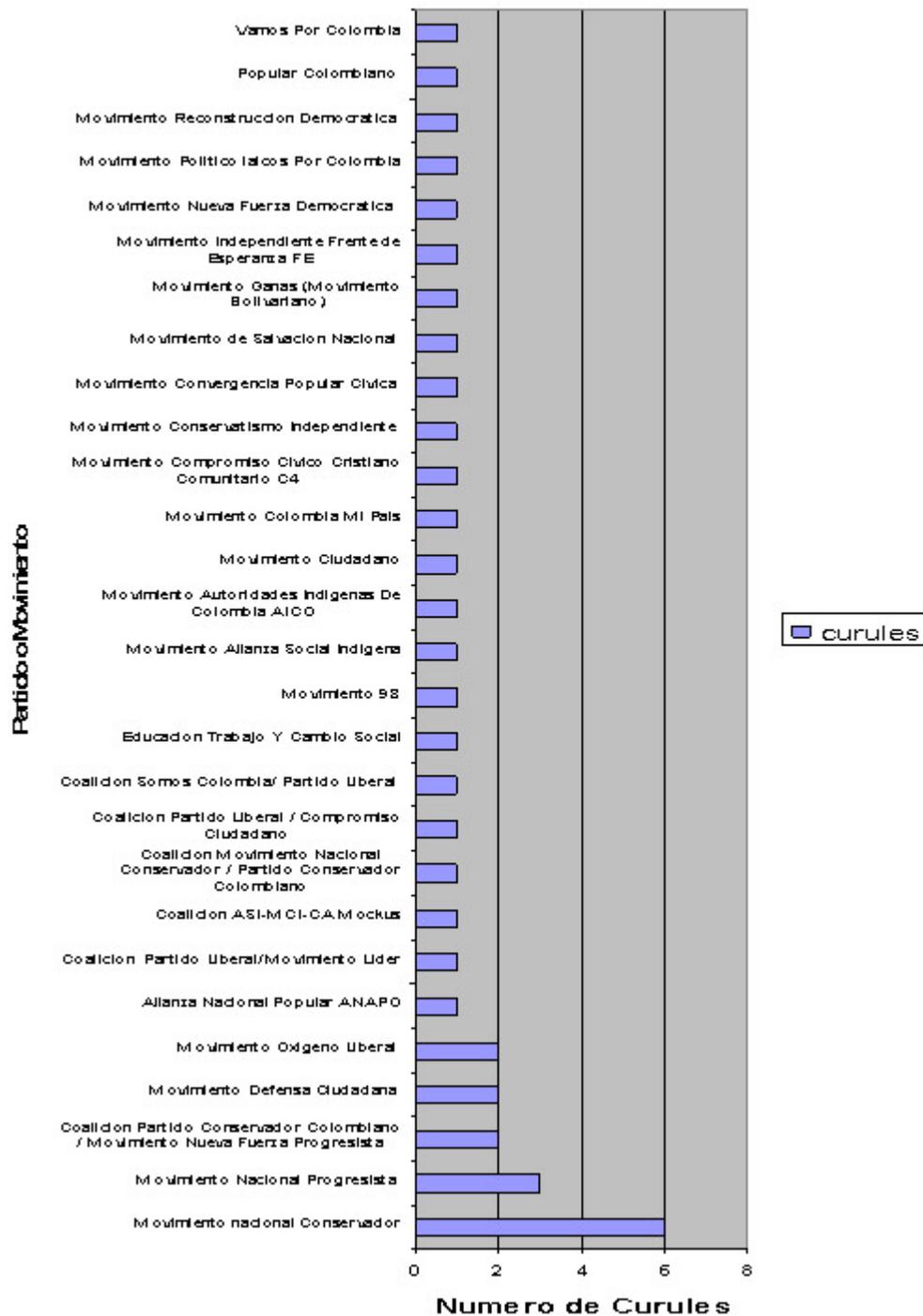


Gráfico 4: Terceros partidos en el Senado de la Republica. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil - Observatorio del Conflicto Armado Corporación Nuevo Arco Iris.

Terceros partidos en el Senado 2002

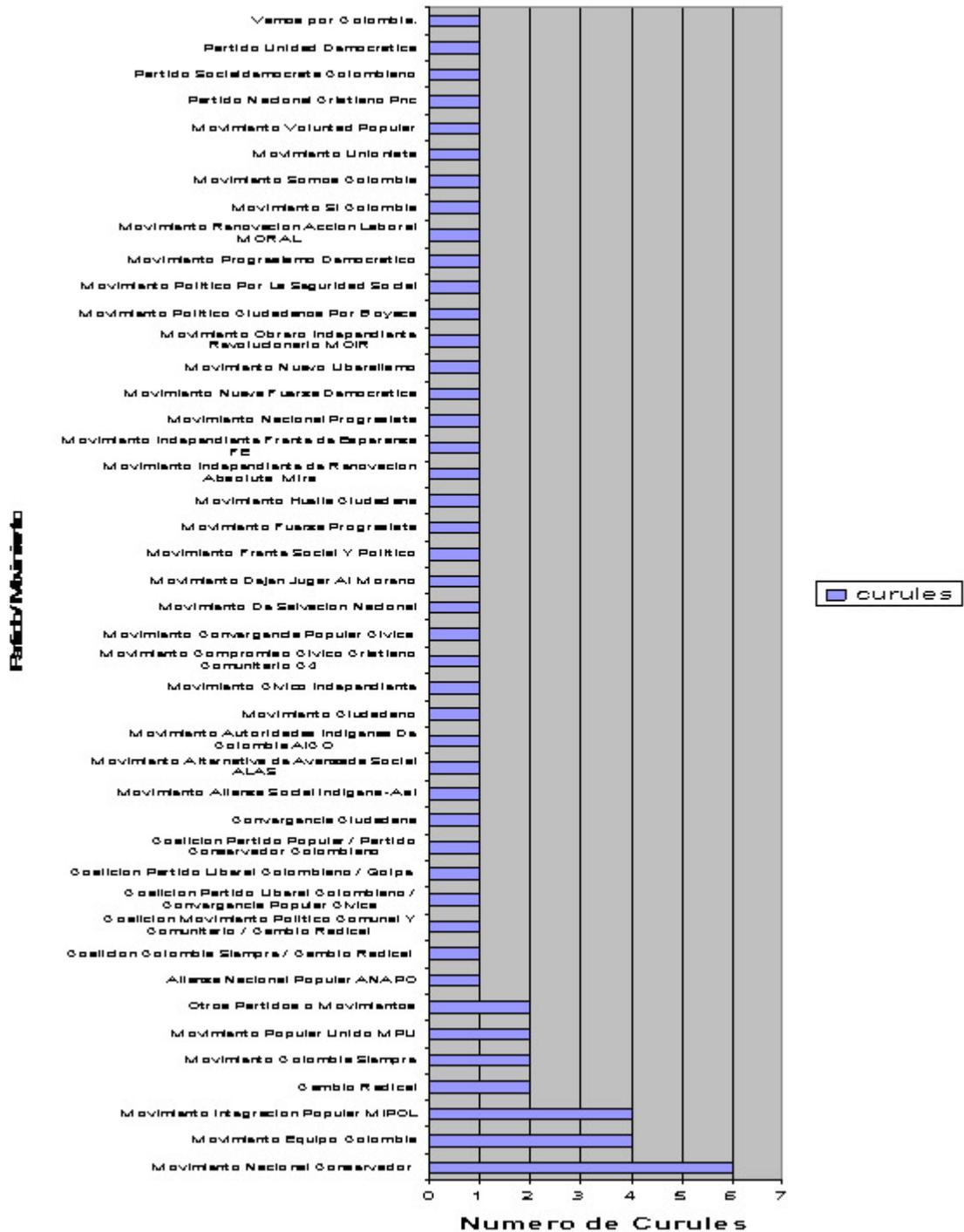


Gráfico 5: Terceros partidos en el Senado de la Republica 2002. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil - Observatorio del Conflicto Armado Corporación Nuevo Arco Iris

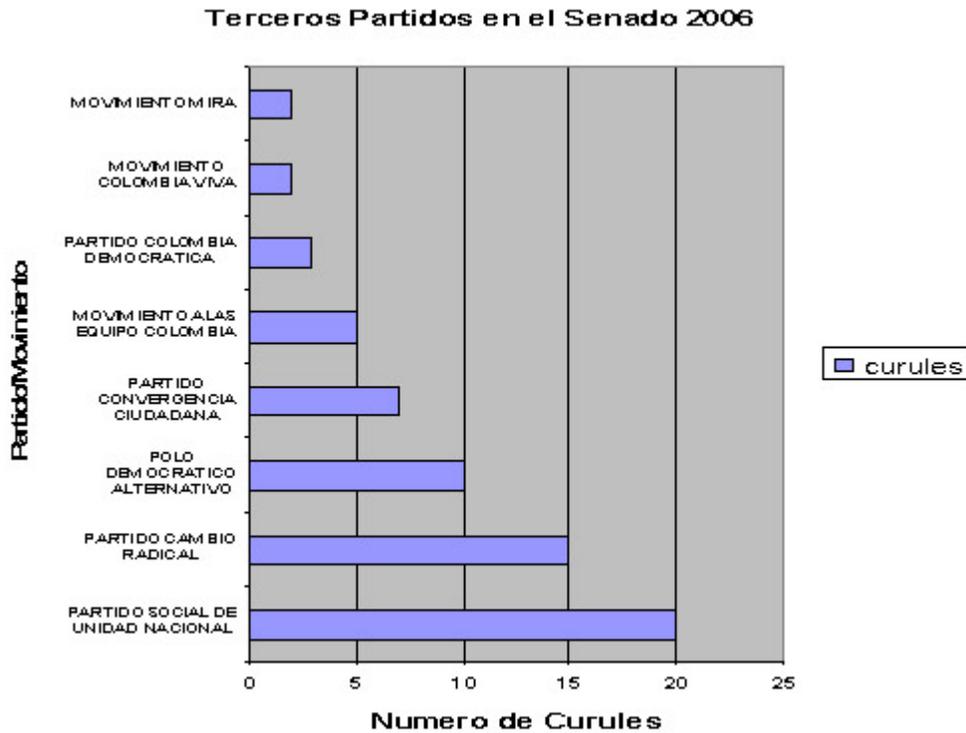


Gráfico 6: Terceros partidos en el Senado de la Republica 2006. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil - Observatorio del Conflicto Armado Corporación Nuevo Arco Iris

En las elecciones del 2003 estos grupos nuevos o fortalecidos en las elecciones del 2002 se presentaron a las elecciones locales con candidatos propios a gobernaciones y alcaldías y obtuvieron una gran fuerza regional. En el interregno entre las elecciones de 2002 y 2003 algunos grupos se unieron para formar Colombia Viva que fue el primer gran intento por darle cohesión nacional a un proyecto con vínculos claros en las zonas paramilitares (Ver Gráficos 4, 5 y 6).

La pujanza de las nuevas fuerzas se dejó sentir. Eligieron 251 alcaldes sumados los obtenidos por Colombia Viva, Sí Colombia, Convergencia Popular Cívica, Mipol, IR, Mpu, Alas, Moral, Colombia Democrática, Apertura Liberal, Cambio Radical, Convergencia Ciudadana, Equipo Colombia y Movimiento Nacional, y Movimiento Conservador Progresista. Mientras el Partido Liberal obtuvo 232 al-

caldes y el Partido Conservador Colombiano 160. También eligieron una cifra cercana a los 4.000 concejales. (Ver Anexos 4, 5, 6 y 7).

El presidente y los parlamentarios le cumplen a los paramilitares, el Estado no tenía por qué

El numeroso grupo de parlamentarios que llegó al Congreso con la ayuda de los paramilitares no defraudó las expectativas que tenían las autodefensas y los compromisos de contribuir a una negociación de paz tal como lo habían convenido en las reuniones realizadas. El sueño de Carlos Castaño parecía realizarse. Se la jugaron toda para que saliera un marco legal generoso para tramitar la reinserción a la vida civil de los paramilitares e influyeron también para que el Presidente tomara la decisión de suspender las extradiciones de los jefes de las autodefensas en proceso de negociación. El

momento culminante de esta relación fue la invitación al Capitolio Nacional a Salvatore Mancuso, Ramón Isaza e Iván Roberto Duque para que presentaran tanto el discurso que justificaba su expansión a lo largo y ancho del territorio nacional como sus aspiraciones políticas. La salva de aplausos que recibieron fue una muestra fehaciente de los fuertes lazos que se habían tejido entre la clase política y los paramilitares¹¹.

Los parlamentarios vinculados de manera directa a las zonas de control paramilitar no estuvieron solos en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con estas fuerzas irregulares. Dado que el Presidente de la República había tomado también la decisión de sacar adelante una negociación con los paramilitares para llevarlos a la vida civil se creó un ambiente muy favorable en el Congreso para todas las iniciativas legales encaminadas a propiciar la desmovilización y reinserción de las autodefensas. Toda la bancada uribista acompañó la idea y también el Presidente y el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo trabajaron incansablemente para que ello ocurriera. No fue fácil. Los organismos internacionales de derechos humanos ejercieron una crítica implacable a las iniciativas del gobierno en el Congreso, también la oposición del Partido Liberal y del Polo Democrático. Consideraban estos sectores críticos que los proyectos de ley que presentaba el ejecutivo no respetaban los estándares internacionales de derechos humanos y no eran rigurosos en la defensa de la verdad, la justicia y la reparación. El gobierno y los parlamentarios uribistas se mantuvieron firmes aún a costa de perder el sector cercano al ex presidente Gaviria y de crear mucho malestar en algunos círculos de la comunidad internacional.

La Ley de Justicia y Paz que salió del Congreso consagraba el carácter político del accionar de las autodefensas y con ello trataba de obviar hacia el

futuro la amenaza de la extradición, no hacía obligatoria la verdad en la confesión para la obtención de los beneficios jurídicos y establecía un régimen blando de penas. Era una ley a la medida de las autodefensas. La clase política había cumplido.

Pero había más fuerzas que intervendrían en la formación del marco legal para las autodefensas y en la aplicación de justicia. Estas fuerzas no estaban controladas por la clase política y tampoco eran influenciables de modo absoluto por el Presidente de la República. La Corte Constitucional se interpuso en el camino. En ejercicio legítimo del control de las leyes retiró del marco aprobado por el congreso el estatus político, hizo obligatoria la verdad en las confesiones y más rigurosas las penas. A su vez la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía mantuvieron sus investigaciones e iniciaron procesos contra dirigentes políticos y altos funcionarios de los cuales se tenía indicios de colaborar con los paramilitares. Estados Unidos seguía insistiendo en la extradición de algunos de los jefes paramilitares y presionando para que no se hiciera ningún compromiso duradero sobre el tema de la extradición con las autodefensas. Algunos medios de comunicación impresos destapaban verdaderas conspiraciones para favorecer a los paramilitares y a los políticos comprometidos con ellos. La incertidumbre jurídica era evidente y el ingreso tranquilo de los paramilitares a la vida civil no estaba garantizado. Así lo sentían los paramilitares a finales de 2005 y a lo largo del primer semestre del 2006.

La lealtad de los parlamentarios cercanos a los paramilitares elegidos en el 2002 y la solidaridad de toda la bancada uribista, lo mismo que el esfuerzo del gobierno, no fue suficiente para garantizar que, al final de todo el proceso de aprobación la Ley de Justicia y Paz, el texto colmara las aspiraciones de las autodefensas. De hecho el texto que salió de la Corte Constitucional sufrió un rechazo rotundo de toda la cúpula de las autodefensas. El país estaba ya en plena campaña

¹¹ *Visita al Congreso de la República de jefes paramilitares, en julio de 2004.*

para elegir nuevos parlamentarios y probar la reelección presidencial. La esperanza de que se pudieran revertir los cambios hechos por la Corte Constitucional se cifró en el nuevo congreso.

Para el 2006 la reforma política obligó al agrupamiento de las fuerzas para alcanzar el umbral del 2% del total de la votación nacional y este hecho fuerza varias fusiones de los grupos que compitieron en el 2002 con importantes ganancias para algunos líderes políticos y con traumatismos para otros (Ver gráficos 4, 5 y 6). También estaban en desarrollo las negociaciones de Santa Fé Ralito que desataron una discusión al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia sobre si debían deshacer las alianzas y compromisos establecidos en el 2002 y lanzarse a configurar un partido único en la que participaran abiertamente los reinsertados, o si debían mantener su vinculación con diversos partidos dentro de la gran coalición uribista. Se impuso la segunda posición.

En este contexto se produjo la conformación de los partidos que habrían de competir en las elecciones parlamentarias del 2006 y que habrían de conformar la nueva coalición que llevaría al presidente Álvaro Uribe Vélez a la reelección. Los grupos más pequeños y con arraigo en las regiones tributaron sus fuerzas a grupos más fuertes con presencia en las grandes ciudades y con voto de opinión para conformar partidos de mayor arrastre y capacidad de negociación. Se produjo entonces la unidad entre el uribismo urbano y el uribismo rural. Surgió el Partido de la Unidad Nacional, se creció Cambio Radical, también Convergencia Ciudadana, se fusionaron Alas y Equipo Colombia, lograron subsistir Colombia Democrática y Colombia Viva. Dejen Jugar al Moreno se hundió por la incapacidad para obtener los votos que le permitieran saltar el umbral pero fue evidente que aumentó su votación y amplió su cobertura a municipios de dura presencia del paramilitarismo.

Este proceso no estuvo exento de tensiones. Quizás las dos más importantes fueron: la que llevó al regreso del sector del ex presidente Cesar Gaviria al Partido Liberal y la que indujo a la expulsión de varios candidatos a Congreso de las listas del Partido de la U, Cambio Radical y Colombia Democrática. En el centro de estas disputas estuvo el tema paramilitar.

El sector político que en los últimos años ha actuado bajo la influencia de Cesar Gaviria Trujillo había prestado una contribución invaluable al triunfo presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Uribe, un líder político de provincia, era poco conocido en el país cuando se le metió en la cabeza la idea de competir por la presidencia. Se sabían de sus ejecutorias en Antioquia y se tenía un recuerdo lejano de cuando ocupó una banca en el Congreso de la República. Para marzo de 2001 apenas contaba con un registro del 2% en las encuestas. La vinculación de seguidores de Gaviria a la campaña le dio un gran impulso. Se sabe de la importante influencia que en los últimos años ha tenido este sector en los medios de comunicación y en la opinión pública, de la relevancia de personas como Rafael Pardo, Rudolf Hommes y Andrés González.

No es exagerado decir que esta alianza le abrió las puertas a Uribe en Bogotá y en otras partes del país. La motivación de Gaviria era clara. De tiempo atrás tenía una dura rivalidad con Serpa y con Samper a los que consideraba no plenamente libres de pecado en el proceso ocho mil y representantes del clientelismo al interior del partido liberal. Para atravesarse en el camino de estos prefirió la alianza con un candidato con el que no tenía muchos vínculos.

La alianza se rompió en la discusión sobre la ley de justicia y paz. Rafael Pardo adelantó una férrea oposición a concederles estatus político a las autodefensas y a darles un trato especial y generoso inspirado en el indulto y la am-

nistía. Abogó por mayores exigencias de verdad, justicia y reparación acudiendo más a la idea de sometimiento a la justicia que a la de negociación política. En estas discusiones logró el apoyo de otros líderes uribistas como Gina Parody y Luís Fernando Velasco.

La reciedumbre que tuvieron los debates en el congreso dejó ver que había algo más que una disputa por la calidad de una ley. Bien pronto la discusión derivó hacia la valoración del conjunto del fenómeno y hacia el tipo de tratamiento que el Estado le debía dar a los paramilitares y a los narcotraficantes. Cesar Gaviria y sus amigos más cercanos vieron que detrás de todo estaba una alianza entre sectores de la clase política regional y los paramilitares. Vieron además que esa fuerza emergente con base en las zonas rurales estaba tratando de echar para atrás algunas de las conquistas de la Constitución del 91 de la cual ellos habían sido protagonistas de primera línea. Por examen racional o por pura intuición se dieron cuenta que lo que estaba en juego era el proyecto de modernización democrática iniciado a principios de los años noventa mediante la alianza entre el presidente Gaviria, la AD-M19 y sectores del conservatismo.

La ruptura fue traumática. El ex presidente se vino de Washington donde acababa de dejar el cargo de Secretario General de la OEA para encabezar el Partido Liberal. Desde allí declaró una oposición radical. Pardo que había participado en el intento de formar un partido nuevo para continuar su respaldo a Uribe volvió a las filas liberales, Rudolf Hommes dejó su puesto de asesor presidencial y desde las columnas de *El Tiempo* empezó a fustigar los signos autoritarios que mostraba el gobierno de Uribe.

El otro incidente vino por cuenta de las informaciones que empezaron a salir a la opinión pública a finales del año 2005 sobre reuniones entre

líderes políticos y jefes paramilitares para formalizar acuerdos con miras a las elecciones del 2006. Gina Parody y otros parlamentarios o candidatos empezaron a ejercer presión en las filas de los partidos uribistas para que se expulsara de las listas a quienes estaban más abiertamente implicados. También la embajada de Estados Unidos insistía en el tema. A Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Mario Uribe, no les quedó más remedio que dejar por fuera de sus colectividades a varios de los señalados. Fue el primer aviso de que tarde o temprano se iba a producir un escándalo de grandes dimensiones sobre la vinculación entre paramilitares y políticos.

En las filas paramilitares también se realizaron intensas discusiones sobre la estrategia electoral para el 2006. El sector de Salvatore Mancuso, Diego Murillo Bejarano alias “don Berna” y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, estimulado por la acogida inicial que tuvo en la opinión pública la negociación entre los paramilitares y el gobierno de Uribe y por la gran exposición que tenían los jefes de las autodefensas en los medios de comunicación, empezaron a acariciar la idea de conformar un movimiento político nacional propio y de saltar de manera directa a la disputa electoral.

La ilusión fue tal que alcanzaron a realizar una reunión de delegados de los grupos paramilitares de varios lugares del país en Medellín convocados por la Corporación Democracia a principios del 2005 para discutir las bases del movimiento y darle una dirección y un plan nacional. En este evento tuvo una destacada presencia Carlos Alonso Lucio quien oficiaba como asesor nacional del proyecto. En cambio el Bloque Central Bolívar en cabeza de Iván Roberto Duque alias “Ernesto Baéz”, de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” y de Rodrigo Pérez Alzate alias “Julián Bolívar” se oponía rotundamente a este proyecto y planteaban que las autodefensas debían persistir en los acuerdos y

alianzas con los movimientos políticos establecidos y canalizar la participación de dirigentes paramilitares en la contienda electoral a través de esos grupos.

“Es una mala pelea, decía Báez. Los políticos que nos han acompañado van a recelar, lo más probable es que entremos en disputas que no favorecen para nada la negociación y la reinserción a la vida civil, es mejor seguir en la estrategia de las alianzas regionales”.¹² En la reunión de Medellín no hicieron presencia delegados importantes del Bloque Central Bolívar.

Aún así el documento que salió de aquella cita planteó “nombrar una comisión que será la encargada de adelantar todas las actividades políticas. Cada estructura de las presentes debe nombrar un representante para conformar la comisión. En primer instancia se aprueba presentar las propuestas políticas, empezando por Antioquia, de acuerdo a las instrucciones del comandante “Adolfo Paz”. Señalan además que hay varias necesidades inmediatas: centralizar y darle identidad a lo que se llama trabajo social y político de las AUC; generar un proyecto político de nivel nacional, superando la dificultad de la federalización exagerada con que nacieron las AUC; y seguir enarbolando los postulados de antiinsurgencia, justificación histórica de la autodefensa.”¹³

En ese tiempo se empezaron a lanzar nombres para integrar las listas. Zulema Jattín planteó que su fórmula a Cámara por Córdoba sería Jairo Andrés Angarita, un ex militar que había sido la mano derecha de Mancuso en la aventura paramilitar. Y en Medellín surgió el nombre de Giovanni Marín cabeza de los reinsertados del Bloque Cacique Nutibara como fórmula de cámara de Rocío Arias, quien aspiraba a saltar de la cámara al senado.

El debate alcanzaría a salir a la opinión pública en un artículo de Rubiño un asesor político muy valorado por la cúpula de las

autodefensas. Escribe en marzo 14 de 2005 y muy en la línea del Bloque Central Bolívar recomienda no participar de modo directo en las elecciones. “Así la veo yo”, es el título del texto en el que empieza por decir que no ve tan lejos el 2010 y por eso no hay que apresurarse en el 2006. Señala “elaborar la plataforma doctrinaria, seleccionar y formar los cuadros de dirigentes y de predicadores, organizar los métodos de trabajo y sentar las bases del movimiento político de alcance nacional al que aspiran los máximos líderes de las AUC exige un trabajo de ingenieros y de arquitectos, y también de orfebres, una voluntad de hierro y una amplitud de criterio y de visión descomunal, y eso no puede realizarse en pocos meses sino en algunos años”.¹⁴

Al parecer las dificultades que atravesaba el proceso y las discusiones con dirigentes y grupos políticos terminarían por convencerlos de que debían continuar con la estrategia de las alianzas y compromisos con los grupos regionales. La decisión tuvo repercusiones parecidas al 2002. Se favoreció un número similar de aspirantes a Senado y a Cámara. Algunos analistas llegaron a pensar que con los escándalos que se estaban presentando la clase política regional se inhibiría de buscar apoyo en los paramilitares o desistiría de sus aspiraciones. No hubo tal cosa. Incluso quienes fueron señalados abierta y públicamente se presentaron a la contienda electoral y la mayoría salieron elegidos, lo que indica la fortaleza del proyecto. El hecho de que no salieran Eleonora Pineda ni Rocío Arias al congreso indujo a muchos a pensar que la influencia paramilitar estaba en franca retirada. Pero el examen detallado de las votaciones de estas mujeres

¹² Entrevista a Iván Roberto Duque, ya citada.

¹³ “Esta historia la construimos entre todos”. Documento de la Fundación Democracia, Medellín, 2005.

¹⁴ Documento firmado por Rubiño, con fecha 14 de marzo de 2005. Circulado por Internet.

que habían tenido la osadía de no esconder sus vínculos con las autodefensas muestra la fría racionalidad de los paramilitares. Los señalamientos públicos que se les hicieron y la expulsión de los grandes partidos uribistas motivaron que rápidamente en algunas zonas la votación que las acompañaba se dirigiera hacia otros candidatos con menos exhibición pública y con mayor opción de salir. Un ejemplo claro de ello lo encontramos en el Bajo Cauca y en Nordeste Antioqueño donde las altas votaciones de Carlos Clavijo y Rocío Arias pasaron a reforzar en el 2006 la elección de Guillermo León Gaviria Correa del Partido Liberal.

El cuadro de los senadores amigos elegidos quedó así: siete de Cambio Radical, seis del Partido de Unidad Nacional, seis de Convergencia Ciudadana, cuatro del Partido Conservador, tres de Alas Equipo Colombia, tres de Colombia Democrática, dos de Colombia Viva y dos del Partido Liberal. También confirmaron su gran bancada a cámara.

Los jefes paramilitares tuvieron la ilusión de que la ratificación de una gran bancada parlamentaria auspiciada por la presión ejercida desde las estructuras de las autodefensas permitiría encontrar un camino jurídico para enmendar la plana del fallo de la Corte Constitucional. El gobierno y los parlamentarios afines empezaron a explorar fórmulas para hacerle cambios a la ley. Llevaron al Congreso la idea de validar nuevamente el estatus político y no encontraron una senda jurídica segura para hacerlo. Se dedicaron entonces a redactar un decreto reglamentario de la ley, pero la naturaleza de este tipo de actos jurídicos no permite un margen de maniobra muy grande para hacer cambios a lo ya establecido por ley.

Entre tanto los jefes paramilitares protestaban por la demora para retomar el camino de la seguridad jurídica. La situación empezó a tensionarse cuando el gobierno -previendo que tendría muchas dificultades en la opinión pública y aún en el congreso para satisfacer las demandas de los jefes de

las autodefensas- le pidió a la cúpula paramilitar se concentrara en un sitio de reclusión en la Ceja en el oriente de Antioquia. La mayoría aceptaron a regañadientes. Pero Vicente Castaño y los hermanos Mejía Múnera se negaron. La carta enviada por Vicente Castaño al Alto Comisionado de Paz publicada por la revista *Semana* en su edición de noviembre 6 de 2006 revela tanto el contenido de las diferencias como el grado de tensión en que se encontraban las relaciones en ese momento. *Semana* además confirma que los demás dirigentes reclusos en La Ceja aunque no suscriben la carta comparten sus términos. El reclamo fundamental es que el gobierno les ha incumplido los siguientes compromisos a las autodefensas: ratificar la seguridad jurídica de la no extradición, acudir a la vía legislativa para restituir las garantías y condiciones de la Ley de Justicia y Paz, como estaban antes del fallo de la Corte Constitucional, privarlos de la libertad sólo cuando los tribunales profirieran sentencia condenatoria, pagar una tercera parte de la condena computando el año y medio de la zona de ubicación.

En ese tiempo se empezaron a presentar signos de una gran reactivación de la actividad armada de grupos paramilitares. El malestar de los jefes paramilitares por la incapacidad del gobierno para satisfacer sus demandas era evidente, pero también era notoria la preocupación del gobierno y las críticas de la opinión pública ante los nuevos brotes de violencia. Se decía que Vicente Castaño había logrado reunir nuevamente cinco mil hombres para rearmarlos y reorganizarlos. Se oían rumores de que en cualquier momento los jefes de las autodefensas podrían abandonar La Ceja y regresar a la clandestinidad. Las alarmas de la embajada de Estados Unidos se prendieron. Fue entonces cuando el presidente Uribe ordenó llevar a los 59 miembros de la dirección paramilitar a la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Los días que siguieron a esa decisión fueron de alta tensión entre el gobierno y las autodefensas y mostraron que la confianza entre las partes se había lesionado tremendamente.

En la gran alianza entre paramilitares y políticos se ha abierto una grieta inmensa en los meses finales de 2006 y principios del 2007. Las detenciones de los parlamentarios Álvaro García Romero, Eric Morris y Jairo Merlano y el llamado a indagatoria a otros dirigentes políticos desataron el temor entre la clase política que se había beneficiado de la expansión paramilitar. La reacción es negar los vínculos o plantear que si acudieron a reuniones o hicieron compromisos fue bajo la presión de las armas. En la orilla de los paramilitares la situación no es distinta. Los jefes paramilitares recluidos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí se sienten abandonados por sus amigos de ayer. En este contexto han empezado a aparecer documentos que habían permanecido en secreto durante varios años. El más explosivo hasta el momento es el que registra un compromiso de cerca de 50 dirigentes políticos de la costa atlántica con la cúpula paramilitar con fecha de julio de 2001.¹⁵

A finales del 2005, cuando la Corporación Nuevo Arco Iris y la analista Claudia López difundieron algunos resultados sobre las investigaciones que habían realizado sobre la relación entre paramilitares y políticos, el senador Álvaro Araujo envió una carta a la Corporación en la que negaba cualquier compromiso con las autodefensas. Uno de los principales argumentos, para negar haber recibido alguna ayuda de los paramilitares en las elecciones, era el de que en esos comicios había bajado sensiblemente su votación en el norte del Cesar donde su familia tenía su caudal electoral. Decía que en vez de beneficiario de los paramilitares era víctima de ellos. En la respuesta

a la carta Claudia López y León Valencia le plantearon que quizás la prueba más importante de que había habido algún tipo de pacto estaba allí. El hecho de perder la votación en sitios donde tradicionalmente tenía el electorado y conquistarla en varios municipios del sur del Cesar donde los paramilitares controlaban el territorio, sólo podía tener como explicación que se había organizado una distribución de territorios entre los distintos candidatos a Senado y Cámara y a él le habían asignado el sur como su lugar principal.

Esas discusiones basadas en deducciones lógicas tuvieron mucho sentido hasta cuando empezaron a aparecer informaciones públicas de reuniones realizadas y testigos de compromisos de los paramilitares con los políticos o cuando apareció el computador de “Jorge 40” con nombres propios de los dirigentes políticos que habían recibido ayuda de las autodefensas. Lo que era un debate político y académico se torno entonces en una disputa judicial. Los parlamentarios y dirigentes políticos se han visto de un momento a otro convocados a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía a responder por los hechos. Era apenas lógico que lo penal propiamente dicho tomara el protagonismo principal.

Pero el análisis político y académico, creemos nosotros, tiene una validez plena. Es en este campo donde se pueden esclarecer las causas de los cambios dramáticos que sacudieron el escenario político en estos diez años y trazar caminos para corregir el rumbo nacional.

En el campo penal las responsabilidades son individuales y el esfuerzo de los jueces se concentra en allegar pruebas para establecer conductas punibles y castigar por ello a cada una de las personas que han incurrido en los delitos. En el campo político se busca establecer tanto responsabilidades colectivas como individuales que derivan en pérdida de legitimidad de los elegidos y en rechazo del electorado.

¹⁵ Documento entregado por Salvatore Mancuso en el marco de su versión libre ante los fiscales de Justicia y paz. Aparecen las firmas de 7 senadores y 4 representantes a la Cámara. También firmaron otros dirigentes políticos locales y tiene fecha de julio 23 de 2001.

Los cuatro senadores y los siete representantes a la cámara, así como el resto de dirigentes políticos que firmaron el acuerdo del 23 de Julio de 2001 con los paramilitares en Santa Fe Ralito podrían ser procesados por colaborar con una organización ilegal. Aquí no sólo hay evidencia sino confesión pública del hecho. Quizás aparezcan cientos o miles de pruebas irrefutables como ésta en las indagaciones que los fiscales están realizando en el marco de la aplicación de la ley de Justicia y Paz o en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto han salido a la luz pública indicios de múltiples reuniones y se han obtenido grabaciones, archivos de computadores y declaraciones de testigos que traen cantidad de datos que implican a la casi totalidad de las personas que aparecieron como beneficiadas por la acción de los paramilitares en las investigaciones académicas. Si la justicia va al fondo del problema es muy probable que vayan a parar a las cárceles no menos de 60 parlamentarios en ejercicio y una buena cantidad de gobernadores, alcaldes y concejales. La legalidad es el tema de los tribunales de justicia.

Pero las investigaciones académicas nos orientan al escenario político. En este campo el tema central es la legitimidad. Si las conclusiones de las investigaciones realizadas por la Corporación Nuevo Arco Iris, la analista Claudia López, la Universidad Javeriana y otras instituciones son serias y consistentes, quiere decir que más de un treinta por ciento de los actuales congresistas obtuvo parte o la totalidad de la votación recurriendo a mecanismos ilegítimos. Que igual situación se había dado en las elecciones parlamentarias de 2002 y en las elecciones municipales de 2003. Esto, sin duda, es una alteración drástica del juego democrático. ¿Qué va a pasar con los partidos que propiciaron esta situación? ¿Qué va a pasar con el propio Congreso? ¿De que manera toca esto al presidente Uribe? Es el gran debate de los próximos meses y años.

La historia no termina

El seguimiento a las relaciones entre los paramilitares y la clase política desde 1999 hasta 2006 ha sido un ejercicio tan apasionante como doloroso. Descubrir cómo se gestó y se realizó la expansión paramilitar; conocer a las fuerzas que la protagonizaron; examinar en detalle el propósito político que la animó; escudriñar el papel jugado por la clase política; ver cómo las fuerzas coaligadas en este esfuerzo consiguieron los objetivos de ganar guerras, cambiar el mapa político y conquistar una negociación política que parecía imposible entre la clase emergente y el estado; mirar también cómo la negociación tenía cabos sueltos, y cómo los tribunales de justicia nacionales e internacionales podían influir directamente en los resultados últimos de la desmovilización paramilitar; ha sido un ejercicio de grandes satisfacciones académicas, pero también de intensas angustias por las miles de víctimas que dejó esta trama macabra.

El capítulo final de este proceso no se ha escrito aún. Los jefes paramilitares encarcelados y los que se han retirado del proceso de paz y han vuelto a la clandestinidad insatisfechos con el giro que ha dado la aplicación de la Ley de Justicia y Paz presionan ahora una renegociación. Los políticos implicados personalmente y los partidos que los cobijan buscan fórmulas para salir bien librados del gran escándalo que ha salido a la luz pública. Pero los tribunales de justicia, los partidos de oposición, algunos medios de comunicación y sectores importantes de la sociedad civil, impulsan drásticas sanciones penales y políticas y un proceso efectivo de desmantelamiento de todo el fenómeno paramilitar.
